

PEDRO J. RAMÍREZ

POR DECIR LA VERDAD

El precio de un periodismo
insobornable



PEDRO J. RAMÍREZ

POR DECIR LA VERDAD

El precio de un periodismo insobornable

La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor.
La propiedad intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el ecosistema de quienes escriben y de nuestras librerías. Al comprar este libro estarás contribuyendo a mantener dicho ecosistema vivo y en crecimiento.

En Grupo Planeta agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía creativa de autoras y autores para que puedan continuar desempeñando su labor. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Queda expresamente prohibida la utilización o reproducción de este libro o de cualquiera de sus partes con el propósito de entrenar o alimentar sistemas o tecnologías de inteligencia artificial.

© Pedro J. Ramírez, 2025

© Editorial Planeta, S. A., 2025
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.editorialplaneta.es
www.planetadelibros.com

Primera edición: septiembre de 2025
Depósito legal: B. 13.777-2025
ISBN: 978-84-08-30450-0
Composición: Realización Planeta
Impresión y encuadernación: Rotoprint
Printed in Spain - Impreso en España



Índice

Dialogando entre tinieblas	13
Puff... Dinitrotolueno	50
El fallido juicio del 11-M	74
Jugando con ETA al ajedrez	102
La muerte de Umbral	124
La sentencia	138
Melón con sal en la Moncloa	154
El hombre que no entendía qué hacía dentro de su cuerpo.	169
Lehman, Madoff y el Gobierno incompetente	183
Mi «Yo acuso»	206
De la fiesta de los cinco mil al Metropolitan Club	240
El desayuno de la oración	256
El Pearl Harbor de Zapatero	279
«Conseguido el objetivo»	299
El alacrán de fray Gómez	320
Un pato cojo en la Moncloa	354
La última crisis de ZP, la primera de <i>El Mundo</i>	383
La audacia de Murdoch, la cobardía de Rajoy	421
El elefante de Corinna, el órdago de Mas	464
Puñales desenvainados: de Corinna a Bárcenas	504
«Luis, sé fuerte»	531
Mi destitución	562

Epílogo del Arponero Ingenuo 595

Prólogo del Arponero Ingenuo 629

Índice onomástico 677

Dialogando entre tinieblas

Mientras el taxi que me llevaba del aeropuerto de Lausana a la estación invernal de Gstaad el 31 de diciembre de 2006 serpenteaba entre las montañas de los Alpes suizos, no podía dejar de sentir una honda consternación, pensando en las imágenes que habían quedado grabadas en mi retina al despegar de Madrid. Era el *parking* de la T-4 en ruinas. Nuestra propia zona cero. La demoledora plasmación de la barbarie.

El precinto policial me había impedido acercarme como peatón, pero la devastación de aquella emblemática terminal, inaugurada por Zapatero tan solo diez meses antes, parecía mucho más impresionante a vista de pájaro. Techos hundidos, vigas retorcidas, cristales rotos, cascotes por doquier... y la constancia de que al menos dos seres humanos habían quedado sepultados entre las ruinas.

Aquel año, la Nochevieja caía en domingo, como si la celebración tuviera que ser doble. Había muchos motivos para ello. Colectivos y personales. España había crecido un 4,1 % en 2006, cuatro décimas más que el año anterior. Era el decimotercer año de progresión ininterrumpida y el segundo mejor de la serie. Zapatero esperaba exultante los datos del paro registrado de diciembre. En su segundo año completo de mandato se habían creado más de 687.000 puestos de trabajo, rompiendo el techo de los 20 millones de ocupados y reduciendo el desempleo a un alentador 8,3 %, el menor desde 1979. Hacía treinta y tres meses que

Aznar había desaparecido de escena, pero su «España va bien» seguía en vigor.

Aún no habíamos cerrado el ejercicio, pero la editora de *El Mundo* llevaba camino de obtener los mayores beneficios de su historia. Rondaríamos los 60 millones en la cuenta de explotación (EBITDA) y los 30 millones de beneficios después de impuestos. Nuestros accionistas italianos estaban eufóricos después de haber consolidado su abrumadora mayoría y avanzaban con paso firme en la negociación para adquirir el Grupo Recoletos. Se trataba de la mayor operación corporativa en la historia de la prensa escrita en España. Si nada se torcía, *El Mundo* iba a tener a su alrededor un potente conglomerado multimedia, capaz de competir de tú a tú con Prisa y Vocento.

Seguro que Emilio Botín me preguntaría por ello durante la cena en Gstaad, en la tradicional fiesta familiar organizada para sus nietos. Mis hijos Tristán y Cósima eran amigos de los hijos de Ana, y mi buena relación con ella y su marido, Guillermo Morenés, se había afianzado desde que seis años antes nos había ayudado a mantener a flote la edición digital cuando *El País* se llevó a todo nuestro equipo. «Don Emilio», como lo llamaba Cósima desde que un día se presentó en la Universidad de Brown, en la que estudiaba, y se hizo fotos con ella y un hijo de Juan Luis Cebrián, todo lo medía en términos de cuenta de resultados. Pero además tenía un interés muy concreto en el asunto. Su cuñado Jaime Castellanos era el presidente y primer accionista de Recoletos, amén de mi confidente e interlocutor habitual en el impulso de aquella operación.

Yo tenía motivos para sacar pecho. Llevaba diecisiete años al frente del periódico que había fundado en 1989 y nadie discutía que era ya uno de los dos grandes diarios españoles. Con una difusión récord de trescientos treinta mil ejemplares en su edición impresa y el liderazgo digital en castellano, *El Mundo* era el único periódico capaz de tratar de tú a tú a *El País*, pese a sus trece años de mayor antigüedad. Además de desvelar graves tramas ocultas

como las de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Fielles o Ibercorp; además de adoptar posiciones rotundas contra las guerras del Golfo o la invasión de Irak; además de influir en los acontecimientos que llevaron al final del felipismo y al auge, esplendor y triste final de Aznar, mis compañeros y yo habíamos sido capaces de afianzar una empresa sólida, altamente rentable, capaz de contratar a los mejores reporteros y columnistas, y de mantener una red de corresponsales en una veintena de capitales de Europa, América, África y Asia. Si a ello le uníamos la potencia de medios como *Marca*, *Expansión* o *Telva*, nuestro techo sería el cielo.

Vivíamos lo más parecido a una edad de oro. Si España iba bien, *El Mundo* iba muy bien y el «mundo mundial» —como decía sardónicamente Felipe González para distinguirlo de nuestro periódico— parecía encaminado a disfrutar de las bendiciones de la globalización y el progreso tecnológico del siglo XXI, tras superar el *shock* del ataque a las Torres Gemelas y las guerras de Afganistán e Irak. Sadam Huseín había sido ahorcado ese mismo sábado en un macabro espectáculo televisado, y hasta el terrorismo parecía una lacra en recesión, extirpada en Irlanda del Norte desde los acuerdos de 1998 y encauzada en España a través del proceso de paz con Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

Eran días de optimismo y teníamos a un optimista nato como jefe del Gobierno. Tanto que la víspera, ese viernes en el que había realizado su tercer balance anual en la Moncloa, no había podido reprimir su adicción a los buenos pronósticos, incluyendo una frase campanuda al referirse a las conversaciones con la banda: «Estamos mejor que hace un año y dentro de un año estaremos mejor».

Era un gran titular. Demasiado bueno. O al menos a mí me lo había parecido. Por eso en la reunión de portada de esa tarde habíamos decidido que el entrecomillado fuera precedido de una advertencia al mismo tamaño: «Zapatero se la juega con ETA». El subtítulo aclaraba la antinomia: «Transmite un mensaje de opti-

mismo sobre el proceso de paz, pero sin explicar por qué». El título del editorial, como siempre en la página 3, aún iba más lejos: «Zapatero deja la nota de su examen final en manos de ETA».

Era una manera de llamarle temerario, y nosotros sí que lo argumentábamos: «El error de Zapatero reside en que está poniendo su futuro político en manos de ETA, que le haría un enorme daño si decidiera romper la tregua e incluso intensificar la *kale borroka* a unos meses vista de las elecciones generales». Es decir, al término de ese 2007 al que nos había remitido. «El drama de Zapatero —concluíamos— es que la nota de ese examen, al que acaba de poner fecha, depende de la flexibilidad y moderación de ETA, lo cual es políticamente suicida».

Yo sabía que a Zapatero no le iba a gustar nada leerlo, pero no imaginaba que las dos últimas palabras de ese editorial fueran a adquirir todo su significado no al cabo de doce meses, sino en cuestión de poco más de doce horas.

Tratándose de un sábado, pocos quioscos habían abierto antes de las ocho. Solo los lectores más madrugadores conocían ya nuestros argumentos cuando a las diez de la mañana estalló el coche bomba en Barajas.

ETA había advertido de su colocación con un par de llamadas, como de costumbre, al filo mismo de la capacidad de reacción policial. Igual que había hecho casi veinte años antes en Hipercor. El *parking* de la T-4 había quedado rápidamente acordonado, pero su desalojo no había sido completo. Dentro permanecían dos inmigrantes ecuatorianos dormidos en sus coches. Carlos Palate solo despertaría para vivir una breve pero atroz agonía de cinco minutos, durante la que trató de pedir auxilio desesperadamente a través de su móvil sin cobertura. Del final de Diego Armando Estacio solo supimos que sus restos aparecieron desmembrados bajo los escombros.

Aún reverberaba el estruendo cuando Arnaldo Otegi, líder de la ilegalizada Batasuna, acusó al Gobierno, con su perfidia habitual, de la falta de avances en la negociación y se refirió al aten-

tado como un «hecho añadido a la situación del preso de ETA De Juana Chaos», a la sazón en huelga de hambre. Era evidente que uno de los objetivos de aquella bomba era coaccionar al Gobierno para que lo pusiera en libertad.

Zapatero compareció por la tarde, cariacontecido, en la Moncloa. En lugar de dar por roto el proceso de paz, como le pedían la oposición, el clamor de la calle y el sentido común, se limitó a declararlo «suspendido». Siguió aferrándose, además, a la resolución del Parlamento que en mayo del año anterior había avalado la negociación con ETA, liquidando el Pacto Antiterrorista con el Partido Popular (PP).

Su tibieza nos impresionó muy negativamente y así lo plasamos en un editorial titulado «¿Aprenderá alguna vez la lección este presidente irresponsable?». Era un texto muy duro, acorde con la gravedad de los hechos y la levedad de la reacción política.

Todas nuestras razones estaban en mi cabeza cuando aquel domingo por la mañana, en pleno zigzaguo entre aquellas curvas alpinas, sonó mi móvil. Era Zapatero. No me llamaba para reprocharme nada, sino para escuchar mis críticas de viva voz y tratar de refutarlas o al menos matizarlas. Afortunadamente, mi conductor ni hablaba ni entendía una palabra de español. En cambio, yo tenía a mano un cuaderno y un bolígrafo.

—Perdona, presidente. Estoy en Suiza, voy en un taxi entre montañas y a lo mejor se corta.

—No te preocupes. Te llamo para comentar el momento en el que estamos. Entiendo lo que habéis publicado, pero no me parece justo...

—Antes que nada, ¿tú cómo estás?

—Yo estoy bien. Hemos vivido muchos días mejores. Estoy jodido, claro. Pero esto no nos devuelve a la posición de

salida. La prioridad inmediata es encontrar a las dos personas sepultadas.

—He visto los destrozos al despegar. Parece una ciudad bombardeada...

—Me lo imagino. Trabajamos a marchas forzadas para retirar los escombros.

—¿Y la respuesta política? —le pregunté.

—Ya he dicho ayer que he dado órdenes de suspender todas las iniciativas de diálogo con la banda.

—Era lo mínimo que debías hacer. Pero *suspender* significa solo «detener o diferir por algún tiempo». ¿Por qué no has dado por roto, por terminado, por acabado el proceso?

—También he dicho que este atentado es del todo «incompatible» con el alto el fuego permanente y que ETA ha tomado un camino que no conduce a nada, porque no va a conseguir nunca ninguno de sus objetivos con la violencia.

—Pero lo que ha ocurrido es demasiado tremendo como para dejar las cosas así. Tú no eres el culpable de que ETA haya vuelto a las andadas, aunque te haya puesto en evidencia. Pero nos parece una «irresponsabilidad política» que te limites a «suspender» el diálogo con ellos.

—Sí, ya lo he leído. Eso es lo que me parece injusto.

—También decimos que no creemos que seas «ni un traidor, ni un malvado», ni que hayas firmado «letras de cambio a ETA», como dicen algunos...

—Bueno, menos mal...

—Pero sí que has actuado «de forma profundamente equivocada». ¿Cómo pudiste decir lo de que «dentro de un año estaremos mejor»?

—Lo dije en función de la información que tenía. No fue una frase afortunada. Es evidente que hoy estamos peor que hace dos días. Pero mi determinación para alcanzar la paz es hoy mucho mayor que nunca.

—Entonces es que la información era muy mala.

—No puedes contarlo, pero la víspera de Nochebuena habíamos tenido una reunión y ellos no dijeron nada que pudiera hacer suponer esto. Al contrario...

—¿Pero no siguen aferrados a exigir la autodeterminación y la anexión de Navarra?

—Siempre te dije que una cosa era que se pudiera hablar de todo y otra que fuéramos a hacer ninguna concesión política. Ni la hemos hecho, ni la haremos nunca...

—También me dijiste cuando declararon el «alto el fuego permanente» en marzo que había llegado «la hora de la alta política» y que tú ibas a apostar por esa vía. Lo apunté. «Quiero que sepas que me la voy a jugar», dijiste. Como quien entra en un casino...

—Mi propósito no ha sido otro que poner fin a la violencia. Está claro que millones de españoles han sentido ahora una profunda decepción...

—Ya has podido comprobar lo poco «permanente» que era ese «alto el fuego permanente»...

—Aún no sabemos lo que ha podido suceder. Por eso he dado orden de suspender el proceso.

—Me han dicho además que estabais preparando un acercamiento de presos en cuestión de semanas. ¿Llegasteis a ofrecerle eso a ETA? Vamos a publicarlo mañana.

—Sobre eso no te puedo decir nada. La política penitenciaria la marca el Gobierno en cada momento.

—Espero que no cedáis al chantaje de De Juana...

—Como sabes, eso está en manos de la justicia...

—¿Y no lo ha planteado ETA en las negociaciones?

—A mí nadie me ha dicho nada de eso.

—¿Tú sabes que era el jefe del comando Madrid cuando intentaron asesinarme en 1985?

—Algo leí en uno de tus libros, pero no sabía que el jefe era él...

—Como te puedes imaginar, no es una cuestión personal. Cuando alguien ha asesinado a veinticinco personas, no hacen falta más motivos...

—Por supuesto.

—Lo que hoy te pedimos en el editorial es que vuelvas al Pacto Antiterrorista con el PP. Es el clamor en la calle. No puedes ser rehén de tu talante solo en una dirección.

—En eso puede que tengas razón...

—Acuérdate que hace ya más de dos años, cuando aquel acto de Anoeta, me dijiste que iba a ser la última vez que se gritara «gora ETA!» en un mitin.

—Era una forma de hablar, en fin...

—Y cuando me dijiste que los de Batasuna están deseando como locos convertirse en Esquerra Republicana...

—Es que sigo creyendo que es así.

—... Y que no permitirían que ETA volviera a matar.

—Puede que en eso me haya equivocado, pero no creo que estén ahora muy contentos.

—Tu optimismo antropológico no sirve con gente capaz de actuar así. Nadie podrá decir que no lo has intentado. Igual que lo intentó Aznar... Siempre son ellos los que rompen la baraja poniendo más cadáveres sobre la mesa.

—La unidad de los demócratas es ahora más importante que nunca. Pero necesito saber en qué nos hemos equivocado... Y no creo que ETA y menos aún Batasuna quieran volver a la situación anterior. Porque vamos a perseguir, detener y condenar a los autores de esta bestialidad.

Nada más colgar repasé mis notas y recordé la fábula de Eso-po sobre el niño y las ortigas. El niño no entiende que las ortigas le hayan hecho daño en las manos cuando se ha limitado a acariciarlas. La madre le dice que tenía que haberlas arrancado con fuerza y el niño la entiende menos aún.

Permanecí poco más de veinticuatro horas en Gstaad. Lo suficiente para ver a Cósima bailar con «don Emilio» y para brindar

con los Botín y otros amigos por la prosperidad de un 2007 ensombrecido por el atentado, pero preñado de las optimistas previsiones económicas que avalaba el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ni siquiera me puse las botas de esquiar, para desistir al poco rato de pisar la pista, como en ocasiones anteriores. Prefiero ver la nieve desde la ventana y mi cabeza estaba en otro sitio.

Al llegar a Madrid el martes 2 de enero me encontré con una declaración inequívoca del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: «El proceso de paz con ETA se ha roto, está liquidado y está acabado; es insalvable». Era lo que, a mi entender, tenía que haber anunciado Zapatero el sábado. Lo que yo le había reprochado el domingo no haber dicho. Por un momento pensé que había cambiado de criterio y que nuestra conversación había contribuido a convencerlo.

Fue una impresión tan falsa como fugaz. El ministro del Interior había tratado de enmascarar su doble error de percepción y prevención con palabras rotundas. Pero no reflejaban la posición del presidente. Cuando Zapatero visitó al fin el jueves los escombros del *parking* de la T-4 se limitó a reiterar lo que me había dicho: «Mi determinación para alcanzar la paz es aún hoy mucho mayor que nunca... Voy a poner lo mejor de mí mismo para acabar con la violencia». Para ello pidió el apoyo del resto de los partidos, pero sin mencionar el Pacto Antiterrorista con el PP.

Casi a la vez que publicábamos sus palabras, me llegó al día siguiente una completa encuesta de Sigma Dos sobre lo ocurrido. Un 51 % de los españoles creía, como yo, que «Zapatero estaba tan empeñado en su “proceso” que no había querido atender a los datos de la realidad». La gran mayoría rechazaba soluciones extremas como una moción de censura, las elecciones anticipadas o las manifestaciones contra el Gobierno; pero nada menos que un 80 % quería que se restableciera el Pacto Antiterrorista.

Con estos datos encima de la mesa, me sentí obligado a decir públicamente y sin ambages algunas de las cosas que le había insinuado al presidente en privado: «Al cabo de dos años de inten-

tarlo contumazmente, el presidente ha conseguido que ETA lo engañe y que eso quede en evidencia de la forma más estruendosa imaginable», escribí en mi carta del domingo.

Y añadí:

Zapatero nunca se ha puesto de rodillas ante ETA, pero le ha dado a entender que estaba ensayando una posición intermedia entre la erguida y la genuflexa que muy bien podía servirles de acomodo a ambos. Ellos han interpretado sus mensajes contradictorios como Hernán Cortés interpretó los fastuosos e inesperados regalos que le enviaba Moctezuma, acompañados del ruego de no seguir acercándose a su capital: se quedó con los regalos y tomó la capital [...].

Los hechos han demostrado que negociar con ETA equivale a «cortejar a un cocodrilo» en los términos en los que lo explicaba Winston Churchill: «No sabes si hacerle cosquillas debajo de la barbilla o darle un garrotazo en la cabeza, porque cuando abre la boca no puedes decir si está tratando de sonreír o preparándose para devorarte».

Aunque lo haya hecho de buena fe, el presidente se ha equivocado gravemente primero al cortejar al cocodrilo y segundo al pensar una y otra vez que, cuando le mostraba sus afilados colmillos, el saurio le sonreía fatigado y transigente. Ahora tendremos que pagar las consecuencias de todo ello porque ETA ha ganado capacidad operativa, poder de reclutamiento y prestigio social durante estos dos años de contemplaciones y condescendencias.

A partir de esas expresivas premisas, mi carta pedía formalmente la rectificación que suponía volver al Pacto Antiterrorista. Sin ocultar a los lectores ni la evolución de mis expectativas ni mi juicio adverso sobre Zapatero:

El pasado domingo yo estaba convencido de que el presidente iba a tomar ese sendero, a mitad de semana tenía mis dudas y a día de hoy empiezo a sentirme desoladamente escéptico.

Tal vez a la hora de la verdad lo único que diferencie a Zapatero de la gentecilla de quinta división que lo rodea es que él es un poco más simpático. Pero eso no lo hace necesariamente inmune a la «estupidez autoprotectiva» que en el 1984 de Orwell salía al paso de todo aquel que estaba a punto de tomar una decisión sabia basada en precedentes o analogías. Por algo dice Bárbara Tuchman en *La marcha de la locura* que «aceptar un error y cambiar de rumbo es la opción que más repugna a un gobernante».

Era imposible ser más contundente sin franquear la frontera de la descalificación personal. Llevaba meses preguntándome cómo un hombre tan dialogante como Zapatero podía empecinarse tanto en un camino que una abrumadora mayoría, incluida gran parte de su entorno, percibíamos como gravemente equivocado. Pero los indicios se acumulaban en su contra. El miércoles 9 de enero desvelamos que dirigentes del Partido Socialista de Euskadi y Batasuna se habían reunido en secreto inmediatamente después del atentado para intentar salvar la negociación con ETA.

Ese mismo día Zapatero recibió a Rajoy en la Moncloa, le reprochó su falta de apoyo y le dio a entender que no volvería al Pacto Antiterrorista. El líder del PP insistió en que el Congreso debía retirar al Gobierno la autorización para negociar con la banda y decidió no respaldar la manifestación de repulsa convocada por el Gobierno en Madrid. «Nunca había habido tanta deslealtad en la política antiterrorista», denunció la vicepresidenta Fernández de la Vega.

La discrepancia era total y se escenificó en un áspero debate en el Congreso. Zapatero reconoció que su pronóstico del 30 de diciembre fue «un claro error» y propuso «un gran acuerdo de 44 millones de españoles» que ampliara —y diluyera, claro— el Pacto Antiterrorista. Era lógico que Rajoy lo rechazara, pero su respuesta fue inusualmente agresiva: «Apoyarle a usted es un suicidio... Si

usted no cumple, ETA le pondrá bombas y si no hay bombas es que habrá cedido...».

Cuando lo escuché, di un respingo. Era volver al «usted traiciona a los muertos» de mayo de 2005. Zapatero le pidió en vano que retirara ese silogismo, «tan bochornoso e indigno». La prueba de que el líder del PP se había pasado de frenada es que en un sondeo de urgencia de Sigma Dos el 42 % dio por vencedor a Zapatero y el 32 % a Rajoy.

El presidente aprovechó ese balón de oxígeno para reunirse cuatro días después con Ibarretxe, quien a continuación lo hizo con Otegi. En lo que parecía una abierta huida hacia delante, estaba fraguándose una iniciativa que conmocionaría aún más a la mayor parte de la sociedad española: la excarcelación del sanguinario Iñaki de Juana Chaos, bajo la coacción que suponía su huelga de hambre.

Tras haber sido condenado a 3.129 años de cárcel por veinticinco asesinatos, De Juana se había convertido en el símbolo de la crueldad desafiante de ETA. Cuando en 1998 sus sucesores en los comandos terroristas asesinaron primero al matrimonio Jiménez-Becerril en Sevilla y luego a Tomás Caballero en Pamplona, él reaccionó en el primer caso con una carta jubilosa —«sus lloros son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajada limpia»— y en el segundo pidiendo directamente «champán y langostinos» para celebrarlo.

Estaba a punto de ser puesto en libertad al cabo de solo dieciocho años de cumplimiento —así lo permitía el Código Penal de 1973, absurdamente vigente— cuando fue juzgado por escribir dos artículos amenazantes contra funcionarios de prisiones y condenado a otros doce años de cárcel. La desproporción era evidente: tanto por la lenidad respecto a lo que había hecho, como por la dureza respecto a lo que había escrito.

Pero más allá de las contradicciones de la legislación penal, lo que estaba en juego era si iba a triunfar el chantaje al Estado que De Juana optó por plantear con la única vida de la que podía disponer mientras siguiera encarcelado: la suya propia.

Ya antes del juicio había mantenido una huelga de hambre de sesenta y tres días, desaprobada por la propia dirección de ETA, en plenas conversaciones con el Gobierno. Tras la sentencia, la reanudó, siendo hospitalizado y obligado a recibir alimentación por sonda. El 23 de enero los médicos advirtieron que su vida corría peligro y la Fiscalía, en sintonía con el Gobierno, pidió su puesta en libertad. El pleno de la Audiencia lo rechazó por doce a cuatro y *abertzales* y nacionalistas se abalanzaron sobre los jueces. «Si De Juana fallece, la judicatura le habrá aplicado la pena de muerte», declaró el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Iñaki Anasagasti.

Nuestro periódico había conseguido entre tanto provocar un gran avance en la búsqueda de la verdad del 11-M. La masacre de Madrid había dejado casi doscientos cadáveres y dos mil heridos, y había cambiado el curso de la historia de España. Tres años después iba a celebrarse el juicio contra los veintinueve acusados por el juez Del Olmo, tras una instrucción calamitosa llena de errores y omisiones. La versión oficial, reflejada tanto en su escrito de acusación como en el de la Fiscalía, señalaba a tres ideólogos islamistas —el Egipcio, Belhadj y El Haski— como «autores intelectuales» o cerebros, a los muertos en la explosión del piso de Leganés —con el Chino, el Tunecino y Allekema Lamari a la cabeza— como responsables de los atentados, a Jamal Zougam, detenido la víspera de las elecciones, como autor material y a los integrantes de la trama asturiana como suministradores de la dinamita Goma 2 ECO, procedente de Mina Conchita, que según ese relato habría estallado en los trenes.

Esa versión oficial estaba, sin embargo, plagada de inconsistencias y enigmas, como la ausencia de pruebas contra los ideólogos; la falta de detalle alguno sobre qué hizo cada uno de los suicidas de Leganés; las contradicciones de los testigos que habían

identificado a Zougam; las dudas sobre las principales pruebas aportadas por la policía, como la furgoneta Kangoo con restos de explosivos y versos coránicos, la mochila de Vallecas con una bomba en su interior y el Skoda Fabia con ADN de Lamari; la condición de confidentes policiales o los lazos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de gran parte de los imputados; y, por encima de todo, el misterio sobre el tipo de explosivo que realmente estalló en los trenes.

Durante los tres años transcurridos, esos enigmas o «agujeros negros», como los llamaba uno de nuestros mejores periodistas, Fernando Múgica, habían sido materia recurrente en mis conversaciones con el presidente del Gobierno. Bien porque sinceramente creía que lo sustancial era que se había tratado de un atentado islamista en venganza por la implicación de Aznar en la invasión de Irak, bien porque sus prioridades fueran otras, Zapatero siempre trataba con una mezcla de desdén y condescendencia las dudas que yo le planteaba. Sobre todo, a partir del momento en que exhibió ante la comisión parlamentaria un informe policial que atribuía al «azar» los vínculos que miembros de ETA habían mantenido tanto con los traficantes de explosivos asturianos como con algunos de los islamistas. Para él, esa era la cuestión definitiva: no había sido ETA y, puesto que no había sido ETA, todo lo demás era secundario. Incluido el que las relaciones de gran parte de los imputados con los servicios españoles y marroquíes parecieran cada vez más sospechosas o que los episodios de negligencia policial y manipulación de pruebas resultaran cada vez más inquietantes.

Yo tenía muy presente que nuestra obligación consistía en hacer lo humanamente posible para contribuir al esclarecimiento de los hechos. No en defensa de ninguna tesis concreta, sino del derecho de los españoles a conocer la verdad de lo ocurrido, a través de una investigación rigurosa e imparcial. Era innegable que el pecado original de Aznar y su Gobierno al atribuir erróneamente a ETA la autoría de la masacre planeaba sobre cual-

quier revelación que se apartara del relato oficial. Pero el burdo juicio de intenciones que afloraba inmediatamente en la prensa gubernamental, acusándonos falazmente de resucitar esa tesis, no iba a arredrarnos en nuestro empeño. Máxime cuando topábamos con una investigación unidireccional en la que todo lo que se apartara de la ortodoxia era literalmente extirpado de los documentos.

Así ocurrió, en concreto, en el caso del informe de los peritos de la Policía Científica, falazmente modificado por sus superiores para eliminar el hecho de que a uno de los islamistas se le había incautado una sustancia —el ácido bórico— que también había utilizado algún comando de ETA. Podía tratarse de una mera coincidencia, de «un dato irrelevante», como editorializó *El Mundo*, pero lo significativo era la actitud del jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y sus directos colaboradores impidiendo que ese elemento fáctico llegara al juez Del Olmo.

Tras varios vaivenes judiciales, entre los que destacó el intento del juez Garzón de incriminar a los peritos, Santano y otros tres mandos fueron juzgados por falsedad documental y absueltos. Según la sentencia, su conducta no había alcanzado la condición de delictiva, pero había estado plagada de «inveracidades», «irregularidades administrativas» y prácticas «inadecuadas e incorrectas». En el caso de Santano, su conducta fue «incompatible con la responsabilidad derivada de su cargo» porque «semejante frivolidad no podía permitírsela el titular de la Comisaría General de la Policía Científica». En lugar de destituirlos o sancionarlos, como habría sido pertinente, Rubalcaba, ministro del Interior, ensalzó su conducta. En lo pequeño como en lo grande, el fin justificaba los medios.

Hacía tiempo que yo le había dicho a Zapatero que *El Mundo* abandonaría la investigación el día que alguien aportara una sola prueba de que el Skoda Fabia hallado «casualmente» en las inmediaciones de la estación de Alcalá, tres meses después del atentado, con ADN del argelino Lamari, estaba allí en el momento de la

masacre. Era un reto teóricamente fácil de cumplimentar, pues tanto los cuerpos de seguridad como las cadenas de televisión habían peinado con sus cámaras la zona el 11-M y los días sucesivos. Lo que, sin embargo, ocurrió es que a la hora de las conclusiones ni el fiscal ni el juez tuvieron en cuenta el contenido ni el hallazgo de ese coche. Todo apuntaba a que había sido colocado *a posteriori* por el CNI para sustentar la implicación de Lamari, a quien había venido siguiendo estrechamente los pasos durante años.

Eliminada esa pieza del tablero, mi obsesión recurrente era la determinación del tipo de explosivo. Esa obsesión llegó a convertirse en un vehemente estribillo en mis conversaciones con el presidente.

—¿Tú sabes lo que estalló en los trenes? Porque yo no. El juez y la Fiscalía sostienen que fue Goma 2 ECO procedente de Mina Conchita porque eso es lo que había en la mochila de Vallecas, en la Kangoo y en el piso de Leganés. Pero el único informe que conocemos sobre el análisis de los restos de los focos es el de los Tédxax y solo habla de «componentes de las dinamitas». Eso es no decir nada. Es como decir que en un registro se encontró ropa. ¿Qué ropa? ¿Había camisas, qué tipo de camisas? ¿Qué dicen los análisis de la Policía Científica?

La controversia había sido alentada por el propio jefe de los Tédxax, el comisario Sánchez Manzano, quien en su comparecencia ante la comisión parlamentaria sobre el 11-M había asegurado que «en los restos que ha dejado la explosión, lo único que se puede averiguar es que es dinamita, porque lo único que se puede encontrar es nitroglicerina, que es componente común de todas las dinamitas». El detalle habría quedado enterrado en las actas de la comisión si mi vicedirector, Casimiro García-Abadillo, alertado por un especialista, no hubiera desvelado que la nitroglicerina no forma parte de la Goma 2 ECO, pero sí del Titadyn.

No era un asunto anecdótico, porque retrotraía a la primera versión policial —«Titadyn con cordón detonante»— sobre la que el Gobierno de Aznar construyó la atribución a ETA por

tratarse del explosivo habitual de la banda. El propio Zapatero le pidió a Rubalcaba que me llamara para aclarar lo sucedido.

—Fue una confusión... Mira, yo, que soy químico, te puedo decir que es fácil confundirse, sobre todo con un compuesto que forma parte de las dinamitas. No le deis más vueltas. Sánchez Manzano se equivocó, eso es todo.

El juez Del Olmo no tuvo, sin embargo, más remedio que citar a declarar a Sánchez Manzano. Practicó la diligencia ante la fiscal, sin informar a la mayoría de las partes, abriendo una pieza separada que declaró secreta. Lo único que trascendió de esa comparecencia fue la misma explicación inverosímil que el jefe de los Tédx incluyó en una carta remitida al diario *El País*: se estaba refiriendo «en general a los focos de las explosiones de cualquier atentado, no en concreto a las del 11-M».

Nadie se tragó esa ocurrencia. En medio del clamor de los sindicatos policiales, Sánchez Manzano fue relevado en el mando de los Tédx y trasladado a la comisaría de Móstoles. Tuvieron que transcurrir siete meses para que nuestro redactor de tribunales, Manuel Marraco, lograra hacerse con el texto de su declaración en la pieza separada.

—¡Esto es una bomba! —exclamó alguien en la redacción sin darse cuenta de la macabra ironía que adquiriría la expresión.

—En este caso, tendrás que añadir «con perdón», pero es verdad, informativamente es una bomba —maticé yo.

«Manzano admite que no se hizo ningún análisis científico del explosivo del 11-M», titulamos el domingo 21 de enero de 2007 a cinco columnas. Resultaba que el aún jefe de los Tédx había declarado al juez que las pruebas realizadas en su unidad, a las pocas horas de la masacre, solo tuvieron un «carácter investigativo» y que si no aportó la composición «ni cuantitativa ni cualitativa» del explosivo fue por los «medios elementales» de los que

disponían. No explicó, sin embargo, por qué no remitió las muestras recogidas en los diez focos de las explosiones a la Policía Científica y —lo más sorprendente— el juez Del Olmo tampoco se lo preguntó.

Aquello era un doble escándalo y así lo explicó nuestro editorial: «Resulta totalmente inaudito que a punto de cumplirse el tercer aniversario de la masacre del 11-M nos enteremos hoy de que no existe —porque no se hizo— ningún informe con valor científico de los restos de los explosivos que estallaron en los trenes [...]. Ello constituye, sin duda, un gran escándalo; pero hay otro escándalo dentro del escándalo: que sea una vez más este periódico quien haya tenido que descubrir este secreto inconfesable, tan extraordinariamente relevante para la investigación policial [...]. La principal prueba incriminatoria contra el comando de Leganés reside en que las fuerzas de seguridad hallaron en el piso restos de Goma 2 ECO, el explosivo que, según consta en el sumario, se utilizó para volar los trenes. Pero ahora resulta que no hay análisis científico ni documento alguno que pruebe que el explosivo de los trenes era Goma 2 ECO».

De hecho, de esa declaración ante el juez se desprendía que el único informe sobre los restos de explosivos encontrados en los focos era el firmado el 26 de marzo de 2004 por una funcionaria de los Tédxax y por el propio Sánchez Manzano en el que solo se hablaba de «componentes de las dinamitas». Había sido remitido a Del Olmo un mes más tarde, el 26 de abril. Para más inri, el informe carecía de validez procesal, pues la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere la firma de dos «técnicos» y Sánchez Manzano, licenciado en Derecho, carecía de esa condición. Preguntado por Del Olmo por qué tardó mes y medio en entregar algo tan somero, contestó que antes tuvo que atender «otras diligencias urgentes».

Tal fue el impacto de lo publicado que, cuarenta y ocho horas después, el tribunal que iba a juzgar los hechos —integrado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás— aprovechó el auto de apertura del jui-

cio oral para tomar una decisión sin precedentes en la Audiencia Nacional: ordenó repetir los análisis de los restos de explosivo hallados tres años antes en los focos de los trenes. A tal efecto, dio a la Guardia Civil y a la Policía un perentorio plazo de veinticuatro horas para que entregaran todas las muestras recogidas en los vagones y estaciones, y acordó formar un grupo de ocho peritos, constituido por cuatro técnicos de los cuerpos de seguridad y cuatro profesionales designados por las partes. Debían entregar sus conclusiones en el plazo de quince días, a tiempo para incorporarlas al sumario antes de que el 15 de febrero comenzara la vista oral. Para mayor garantía de transparencia, el estudio pericial se realizaría en el laboratorio de la Policía Científica y sería grabado en audio y vídeo por cámaras expresamente colocadas para ello.

Esta iniciativa no solo ponía en evidencia al ya exjefe de los Tédax, sino que suponía un varapalo para el juez instructor y la Fiscalía. Del Olmo se había negado sistemáticamente a encargar nuevos análisis y la fiscal encargada del caso, Olga Sánchez, había llegado a perder los nervios en una reunión con varios abogados defensores. «El explosivo es Goma 2 ECO; es lo que estalló en los trenes y en Leganés. Es un tipo de explosivo que no tiene nada que ver con el Titadyn. ¡Y ya vale!». Esta salida de tono, en presencia del instructor, le había merecido el apodo de Olga Vale Ya, utilizado por varios de nuestros columnistas.

El Mundo celebró la decisión del tribunal —era un hito que compensaba la vileza de los ataques que sufríamos— con un editorial titulado «Primer paso firme del Estado en pos de la verdad sobre el 11-M». Además de elogiar la resolución de los tres jueces y exponer la dificultad técnica que iba a entrañar una prueba pericial al cabo de tanto tiempo, aprovechamos para dejar clara una vez más nuestra motivación y actitud:

Nuestra intención desde el primer momento no ha sido corroborar ninguna hipótesis previa, sino aportar informaciones relevantes que contribuyeran a aclarar el atentado[...].

Nuestra opinión sigue y seguirá siendo la misma: la versión oficial —plasmada en las conclusiones apresuradas y tramposas de la comisión del Congreso y en los escritos del juez y la fiscal— está plagada de errores, contradicciones e incógnitas que nadie hasta ahora ha podido despejar. *El Mundo* no tiene una teoría alternativa. Solo quiere que se agoten todas las posibilidades para aclarar la masacre.

Más claro no podíamos decirlo.

Casimiro García-Abadillo publicó al día siguiente una columna titulada «Pero ¿no estaba todo tan claro?», en la que presentaba el auto de apertura del juicio oral como «una enmienda a la totalidad de la instrucción» y subrayaba: «Pone de relieve una de las fallas más profundas del sumario: casi tres años después del atentado aún no se sabe con exactitud qué explotó en los trenes». Mi vicedirector añadía: «Hace tan solo veinticuatro horas hacer esa afirmación era motivo de escándalo. La versión oficial de los hechos no admitía fisuras. Cuestionar esa verdad acarreaba graves acusaciones».

Casimiro elogiaba también que el tribunal admitiera citar como testigos a los etarras Henri Parot —cuyo teléfono había aparecido en la celda del número dos de Lamari—, Gorka Vidal e Irkus Badillo. Los dos últimos conducían la llamada «caravana de la muerte», interceptada con quinientos kilos de explosivo el mismo día en que, según el sumario, el Chino y sus secuaces trasladaban doscientos kilos de Goma 2 ECO desde Asturias. El ex-minero Suárez Trashorras, que suministró esos explosivos, había declarado ante Del Olmo que el Chino le había dicho que los conocía. Podría ser verdad o mentira, relevante, irrelevante o fruto del «azar», como decía la policía, pero era incomprensible que ni el instructor ni la fiscal hubieran hecho nada por aclarar esas circunstancias.

En el equipo directivo del periódico aquel auto produjo satisfacción, pero no sorpresa. Hacía semanas que el presidente del

tribunal Javier Gómez Bermúdez, un magistrado sagaz y enérgico cuyo cráneo a lo Yul Brynner y dotes escénicas lo catapultarían pronto a la condición de celebridad televisiva, venía mandándonos mensajes de apoyo a nuestra investigación. Uno de los más concretos llegó a través de su excompañero de la Audiencia Javier Gómez de Liaño, a quien propuso que organizara un encuentro conmigo. A mí me pareció que, por muy discreta que fuera la cita, siempre habría riesgo de que trascendiera y el antecedente de la «teoría de la conspiración», construida por el felipismo a partir de mi relación con el juez Garzón durante la investigación sobre los GAL, me aconsejaba una especial cautela.

—Dale las gracias de mi parte, Javier. Dile que yo también tengo muchas ganas de conocerlo y que me encantará charlar un día con él, pero que lo más prudente es hacerlo después de que haya dictado la sentencia.

Como alternativa, me pareció bien que la adjunta al director Victoria Prego, conectada familiarmente con el mundo judicial, montara una comida en su casa con Gómez Bermúdez y Casimiro. Por lo que me contaron ambos, el encuentro fue como la seda: el presidente del tribunal valoraba muy positivamente las aportaciones del periódico y compartía muchas de nuestras apreciaciones. Según publicaría Casimiro en el prólogo de un libro varios años después, Gómez Bermúdez consideraba al instructor del sumario, su colega Juan del Olmo, «un juez muy limitadito» y aseguraba que los mandos policiales que habían manipulado la investigación terminarían yendo «caminito de Jerez», es decir, a la cárcel. Esa misma expresión la oyeron de sus labios otros periodistas con los que también se reunió durante esa etapa.

Todo aquello parecía muy alentador y reforzaba nuestras expectativas ante el inicio del que iba a ser el juicio del siglo, pero yo no dejaba de considerar las circunstancias políticas en las que iba a celebrarse. Desde el 14-M había una mayoría de izquierdas que daba estabilidad al Gobierno y, aunque el talante de Zapatero marcara un tono muy diferente al de los tiempos de

González en las relaciones con la oposición y la prensa, la explicación de que el 11-M había sido la respuesta de Al Qaeda al apoyo de Aznar a Bush era la piedra angular de su relato. También el convencimiento de que la atribución de la masacre a ETA por parte del Gobierno del PP no había sido un error, sino una mentira deliberada.

En ese contexto, la batalla por la renovación de la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había estado condicionada por la habitual politización del poder judicial. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos por el PP habían respaldado la reelección de Gómez Bermúdez, mientras los del sector autodenominado «progresista» se habían dividido entre Baltasar Garzón y José Ricardo de Prada. Este último tenía recurrida la decisión, alegando primero problemas de forma y luego el mayor peso de sus propios méritos. Bermúdez era un hombre ambicioso y sabía que la próxima renovación del CGPJ implicaría un cambio en la correlación de fuerzas.

Tampoco me tranquilizaba nada la presencia en el tribunal del mismo Alfonso Guevara que veintidós años antes me había recluido durante unas horas en un calabozo «por un capricho», tal y como ha quedado relatado en *Palabra de director*.^{*} Era sintomático que alguien capaz de comportarse así hubiera podido seguir progresando en la carrera judicial. Se trataba en todo caso de cuestiones secundarias. Lo esencial era que la tenacidad de nuestro periódico había reabierto la indagación sobre qué explosivo estalló en los trenes. Y nuestra actitud era lo suficientemente honesta como para dar por bueno el resultado de esa prueba pericial que iba a realizarse con luz y taquígrafos, tanto si rebatía la versión oficial como si la corroboraba.

* Barcelona, Planeta, 2021.